

Medellín, dieciocho (18) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Proceso | EJECUTIVO CON GARANTÍA REAL |
| Radicado | 05360 31 03 001 2019 00029 01 |
| Demandante | PAULA ANDREA HERNÁNDEZ RIVERA |
| Demandado | MARIO FERNANDO PAZ PORTILLA |
| Opositora | OMAIRA NOHEMI ERAZO PÉREZ |
| Juzgado origen | PRIMERO CIVIL CIRCUITO ITAGÜÍ |

Se decide la apelación interpuesta frente al auto proferido el 25 de septiembre de 2023, mediante el cual se rechazó la oposición al secuestro formulado en el asunto de la referencia.

1. ANTECEDENTES.

El 8 de febrero de 2019 se formuló demanda ejecutiva con garantía real de hipoteca respecto del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No 001-958308 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur, en contra de Mario Fernando Paz Portilla¹.

Posteriormente, el Juzgado libró mandamiento de pago², decretó el embargo del inmueble³, ordenó continuar la ejecución⁴ y, una vez inscrita la cautela, comisionó a la Secretaría de Gobierno de Itagüí para la práctica de la diligencia de secuestro⁵.

El 26 de junio de 2023 el comisionado efectuó la diligencia y se devolvió auxiliado al juzgado de origen⁶. El 5 de julio siguiente la señora Omaira Nohemí Erazo Pérez presentó oposición al secuestro y solicitó el levantamiento del secuestro, con fundamento en el artículo 597 del CGP⁷.

La opositora expuso que convivió en unión marital de hecho con el demandado, que desde el 2 de mayo de 2009 residió con este y sus hijos en el inmueble objeto de cautela, que el 23 de noviembre de 2010 se terminó dicha unión y a partir de tal fecha continuó residiendo en el bien hasta la fecha de la oposición ejerciendo actos de señora y dueña, toda vez que asumió el pago de los servicios públicos y de

¹ Ver ruta carpeta 01PrimeraInstancia / archivo 01CuadernoPrincipal páginas 1 - 43

² Ibid. páginas 54-55

³ Ibid. archivo 02MedidasCautelares1 página 7

⁴ Ver ruta carpeta 01PrimeraInstancia / carpeta C02Principal / archivo 35AutoOrdenaContinuarEjecucion

⁵ Ver ruta carpeta 01PrimeraInstancia / carpeta C02Principal / archivo 50AutoComisionaSecuestro

⁶ Ibid. archivo 53ComisorioAuxiliado

⁷ Ver ruta carpeta 01PrimeraInstancia / archivo 001OposicionSecuestro

mantenimiento de escaleras, vías de acceso, jardines, tejas y de la red de gas natural, asimismo cambió el tejado, realizó pintura general, instaló malla y muro y construyó una vía de acceso desde la vía principal hasta la vivienda, ostentando en consecuencia la calidad de poseedora legítima. Añadió que promovió proceso de pertenencia sobre el bien cautelado, el que se encontraba en curso.

Mediante proveído del 7 de julio de 2023, el Juzgado incorporó al expediente la diligencia de secuestro y corrió traslado a la parte demandante de la oposición formulada⁸.

La demandante se pronunció indicando que el proceso de pertenencia no afecta el trámite del proceso ejecutivo hipotecario porque no se ha dictado sentencia en aquel; que las facturas de impuesto predial se encuentran a nombre de Mario Fernando Paz y cualquiera puede pagar en nombre de otro, agregando que hubo un pago efectuado por el esposo de la acreedora hipotecaria; que la opositora no acreditó el pago de la administración, a quien le compete lo concerniente a las fachadas, jardines y puntos fijos por ser propiedad horizontal; que las declaraciones extrajuicio aportadas no se sometieron a contradicción; que el documento de reconocimiento de la sociedad patrimonial no se enmarca en lo dispuesto por la Ley 154 de 1990; que el pago de servicios públicos, de mantenimiento y jardinería y pintura es propio de quien habite un bien; que la revisión periódica de la red de gas natural es un deber de la empresa que presta el servicio y que tales medios de prueba, así como las fotografías del inmueble y certificados bancarios no demuestran la posesión⁹.

A continuación, por auto del 3 de agosto de 2023 se fijó fecha para práctica de pruebas¹⁰, la cual se llevó a cabo el 21 de septiembre de 2023¹¹. La oposición se resolvió desfavorablemente mediante proveído del 25 de septiembre de la misma anualidad por falta de prueba de los elementos de la posesión¹².

Para fundamentar la decisión, el *a quo* expuso que el documento suscrito por la ex pareja de la opositora no da cuenta del momento a partir del cual se está ejerciendo la posesión, por cuanto solo muestra la existencia de la unión marital de hecho, sin que mencione circunstancias relacionadas con la propiedad del inmueble, careciendo además de sustento probatorio alguno la afirmación de la

⁸ Ibid. archivo 003AutoIncorporaCorreTraslado

⁹ Ibid. archivos 0004PronunciamientoOposicion y 0006PronunciamientoOposicion

¹⁰ Ibid. archivo 007AutoFijaFechaAudienciaOposicionSecuestro1

¹¹ Ibid. archivo 0011ActaAudienciaOposicionSecuestro

¹² Ibid. archivo 0012AutoResuelveOposicionSecuestro

opositora al aducir que el señor Mario Paz se quedó viviendo en otro apartamento.

Adicionalmente, sostuvo que la opositora bien puede estar ejerciendo la tenencia del inmueble desde la época de la separación con su compañero, pero que no hay prueba del pago del impuesto predial, por lo menos hasta el momento en que no pudo seguir pagando como lo indicó o, de la cuota de administración, dejando en tela de juicio la exteriorización del ánimo de señor y dueño.

Puntualizó que la sociedad patrimonial no ha sido objeto de disolución y liquidación y que, si bien la opositora señaló tener una difícil situación económica que le impidió legalizar tal asunto, no resultaba razonable que creyéndose única propietaria no hubiese adelantado gestión alguna y apenas para el 2023 presentara la demanda de pertenencia, circunstancia esta última que da a entender la necesidad de proteger el inmueble en razón del proceso ejecutivo, además, que tampoco existía evidencia del momento desde el cual se comporta como poseedora con desconocimiento del anterior compañero sentimental como propietario.

Agregó que, por el contrario, el testigo Julio Enrique Tobón Ramírez dio cuenta de la reunión sostenida con el demandado y otras personas al momento de visitar el inmueble objeto de gravamen, con miras al otorgamiento del mutuo que daba a entender con claridad los actos de señor y dueño del demandado, puesto que ni si quiera en tal reunión se tuvo en cuenta a la opositora y tampoco se le comunicó del préstamo y gravamen hipotecario, por tanto, concluyó ausencia de prueba que permitiese deducir la posesión con ánimo de señorío.

La opositora se resistió a lo resuelto mediante recurso de reposición y en subsidio apelación¹³.

2. EL RECURSO.

Para fundamentar los recursos, la opositora sostuvo que sí probó efectivamente la posesión, que en audiencia nunca afirmó ser tenedora, ni poseedora en conjunto con su familia, incluso mencionó el proceso de pertenencia que adelanta a nombre y causa propia, demostrando la posesión con el pago de los servicios públicos desde su cuenta personal, de los impuestos hasta el año 2015 o 2016 y del mantenimiento de la vivienda.

¹³ Ibid. archivo 0013EscritoReposicionApelacion

Reprochó la valoración que el juzgado efectuó respecto de las contradicciones entre el testigo Julio Tobón y Deisy Restrepo que motivó incluso un careo, porque a pesar de que el primero aseguraba que esta última ingresó a la vivienda, la segunda lo contradijo y tampoco valoró que las fotografías que exhibió Mario Paz fueron tomadas de Marketplace de una publicación del bien para la venta.

Igualmente, recriminó que no se estimaran las afirmaciones de la testigo Liliana Salazar al aducir que Mario Paz entraba tocando el timbre, que iba solamente de visita y que era Omaira Erazo quien se encargaba del mantenimiento y reparación.

Indicó adicionalmente que no es razonable el argumento frente al pago del impuesto predial, pues luego de la separación la opositora debió asumir los gastos de sus hijos por el constante incumplimiento del demandado, siendo lógico que hubiese dado prioridad a la alimentación y educación de sus hijos como necesidades básicas.

Criticó que el *a quo* indicara sin motivación alguna que la opositora sí tuvo una época en la cual pudo pagar el impuesto predial, que no se apreciara la ausencia de Mario Paz en la audiencia, que no se tuviese en cuenta que la opositora no es abogada, que la liquidación de la sociedad patrimonial prescribe en un año, que la acreedora no acreditó el ingreso al inmueble, que la opositora no se dio nunca por tenedora y que el pago de impuestos no es el único medio para acreditarse como poseedor.

Estimó que la posesión se demostró con pruebas que dan cuenta de la residencia y manutención del bien por más de 14 años y de circunstancias como la generación de ingresos desde el mismo predio, radicar un proceso de pertenencia e invertir todos los recursos disponibles que tenía, razones por las cuales solicitó revocar la decisión, para en su lugar, acceder favorablemente a la oposición formulada.

De los medios impugnativos propuestos se corrió traslado a la contraparte, quien se pronunció en la debida oportunidad.

Señaló la parte actora que no comparte los argumentos del recurso, toda vez que el proceso de pertenencia no cuenta con sentencia en firme y el bien inmueble pertenece al ejecutado desde el 2015, conforme se desprende del certificado de libertad y tradición y la escritura pública de constitución de la hipoteca. Añadió que la opositora no acreditó la calidad de poseedora, puesto que no pagó

los impuestos desde el año 2015 y que la sociedad patrimonial no se demuestra con el documento allegado, sino mediante escritura pública, conciliación o declaratoria judicial¹⁴.

Mediante auto del 18 de octubre de 2023, el Juzgado resolvió no reponer la decisión controvertida, luego de considerar que la opositora no logró acreditar el animo de señorío, puesto que en momento alguno probó, siendo su carga, que a partir de determinada fecha desconoció la calidad del propietario y que, por el contrario se desprenden circunstancias que muestran que el demandado se consideró propietario del inmueble tiempo después de haber abandonado la vivienda que compartía con sus hijos y que prueba de ello, es el hecho de haber hipotecado dicho inmueble sin el consentimiento o aquiescencia de la opositora, quien no se enteró de la visita que para tales efectos se había adelantado entre los señores Mario Paz, Julio Enrique Tobón y Deisy Restrepo junto con otro comisionista, dando cuenta los citados Julio Enrique y Deisy Restrepo de dicha diligencia adelantada para conocer el inmueble que sería objeto de la hipoteca.

Precisó que, si bien la señora Deisy Restrepo manifestó no haber ingresado a la vivienda el día de la visita, fue coherente y espontánea su versión al manifestar el haber conocido la vivienda ese mismo día por medio de fotografías y, si bien esperó en la portería de la copropiedad y no entró a la vivienda, tal conducta es lógica si se tiene en cuenta que con el demandado Mario Paz ostentaba una relación sentimental fruto de la cual se dio cuenta de un hijo.

Sostuvo además que, si bien se indica una difícil situación económica de la opositora, esbozando en razón de ello que no adelantó ningún trámite liquidatorio de la sociedad patrimonial con su expareja y apenas ahora en el año 2023 vino a presentar demanda de pertenencia, tales argumentos no generan el convencimiento que permita tenerla como poseedora con ánimo de dueña, debiendo ser diligente en lo que a la titulación del bien se trata, como comportamiento que se espera de cualquier persona en la administración de sus asuntos.

Agregó que efectuar mantenimiento a la propiedad y pagar los servicios públicos, no acreditan la posesión, pues los mismos surgen del hecho de ostentar la tenencia del inmueble de tiempo atrás y que la declaración hecha por la testigo señora Liliana María Salazar como empleada de servicio doméstico, tampoco puede tenerse como

¹⁴ Ibid. archivo 0015PronunciamentoTrasladoRecurso

sustento para concluir acreditada la posesión, puesto que ésta informó no conocer pormenores de la relación entre la expareja, menos asuntos relacionados con la intimidad del hogar, sumado al hecho que solo hacía presencia dos días por semana a desarrollar su labor, no siendo lógico por el solo hecho de manifestar que cuando Mario Paz visitaba el inmueble se limitaba a tocar la puerta de manera respetuosa, indicara el reconocimiento de dominio ajeno en cabeza de opositora, precisando que ello es un asunto meramente circunstancial del cual puede deducirse una serie de conjeturas como por ejemplo la inexistencia de relación sentimental con la opositora o el respeto a una nueva intimidad familiar. Motivos por los cuales el Juzgado mantuvo incólume la decisión recurrida¹⁵.

3. CONSIDERACIONES.

3.1 COMPETENCIA.

Por disposición del artículo 321 del CGP, el recurso de apelación contra autos procede solamente en contra de aquellos que la misma norma relaciona o que precisan disposiciones especiales, listado taxativo dentro del que se encuentra el proveído atacado en el numeral 9¹⁶.

Para resolver, dispone el artículo 328 de la misma obra que, salvo decisiones que se deban adoptar de oficio, el superior debe limitar su análisis a las razones de inconformidad expuestas por el recurrente.

3.2 PROBLEMA JURÍDICO.

El problema jurídico consiste en determinar si la decisión tomada en primera instancia se encuentra ajustada a derecho o si, por el contrario, la oposición a la diligencia de secuestro del inmueble objeto de garantía real es procedente en los términos solicitados por la opositora y habrá de declararse avante la misma.

3.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

Oposición a la diligencia de secuestro (normatividad)

Dispone el artículo 596 del CGP en su inciso segundo, que “a las oposiciones se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en relación con la diligencia de entrega”.

¹⁵ Ibid. archivo 006AutoResuelveRecursoOposicionSecuestro

¹⁶ En concordancia con el artículo 596 núm. 2

Por su parte, el artículo 309 del CGP establece los requisitos y trámite en que el tercero poseedor puede oponerse a la diligencia de entrega de un bien en aras de hacer valer su derecho posesorio sobre el mismo, así se desprende del numeral 2 de la mencionada norma cuando dice que "[p]odrá oponerse la persona en cuyo poder se encuentra el bien y contra quien la sentencia no produzca efectos, si en cualquier forma alega hechos constitutivos de posesión y presenta prueba siquiera sumaria que los demuestre".

Así, compete al juez verificar en un primer momento i) que el bien se encuentre en poder del opositor¹⁷ y que, ii) el opositor pruebe sumariamente la calidad de poseedor, posteriormente le corresponde realizar un segundo análisis que determine si la sentencia produce efectos en su contra para decidir si rechaza de plano la oposición o si la admite. Admitida la oposición, el juez debe resolverla previa práctica de las pruebas solicitadas por las partes en los términos y oportunidades establecidos en los numerales 2, 6 y 7 de la misma norma. Para la definición de la controversia, deberá determinar si en el asunto se encuentra probada la calidad de poseedor, ya no sumariamente, que dé al traste con el secuestro pretendido en el proceso judicial que se ordenó.

Por su parte, el artículo 597 del CGP brinda al poseedor que no estuvo presente en la diligencia la oportunidad para hacer valer sus derechos frente al bien cautelado. Dispone la norma:

"ARTÍCULO 597. LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO Y SECUESTRO. Se levantarán el embargo y secuestro en los siguientes casos:

8. Si un tercero poseedor que no estuvo presente en la diligencia de secuestro solicita al juez del conocimiento, dentro de los veinte (20) días siguientes a la práctica de la diligencia, si lo hizo el juez de conocimiento o a la notificación del auto que ordena agregar el despacho comisorio, que se declare que tenía la posesión material del bien al tiempo en que aquella se practicó, y obtiene decisión favorable. La solicitud se tramitará como incidente, en el cual el solicitante deberá probar su posesión".

En relación con la posesión material, cabe resaltar que la doctrina que acogió el Código Civil se funda en dos elementos, a saber, el *corpus* y el

¹⁷ Sin perjuicio de la oposición que en su nombre puede realizar el tenedor a cualquier título (Art. 309 #3 C.G.P.)

ánimus, es decir, la relación material con la cosa, y la voluntad o señorío físico frente a la misma. Por lo que, no basta probar la tenencia física de la cosa que configuraría el *corpus*, sino los actos positivos tendientes a demostrar que tal tenencia se detenta con ánimo de señor y dueño.

Frente a estos elementos, tiene dicho la Corte:

«(...) es evidente que el Código Civil “destaca y relleva en la posesión no solo la relación de hecho de la persona con la cosa, sino un elemento intelectual o psicológico. Así, mediante el artículo 762 establece que ‘la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño’, con lo cual reclama para su tipificación la concurrencia de dos elementos con fisonomía propia e independiente: el corpus, o sea el elemento material u objetivo; y el animus, elemento intencional o subjetivo. ... Según la teoría subjetiva o clásica, que fue la acogida en el punto por los redactores de nuestro estatuto civil, de los dos elementos que la integran es el animus el característico y relevante de la posesión y por tanto el que tiene la virtud de trocar en posesión la mera tenencia. Para que ésta exista es bastante la detentación material; aquélla, en cambio, exige no sólo la tenencia sino el ánimo de tener para sí la cosa” (G. J., t. CLXVI, pág. 50)» (CSJ SC. 064 de 21 de jun. de 2007, Rad. 7892, reiterada en sentencia SC3687 del 25 de ago. de 2021, exp. 2013-00141-01)

La prueba de la calidad de poseedor del opositor, en términos generales, atañe a una carga de quien la afirma, pues de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de modo que, tratándose de una diligencia de secuestro, el poseedor que acude en pro de hacer valer sus derechos, debe demostrar que realmente es el poseedor del bien, con la probanza inequívoca de los elementos descritos.

3.4 CASO EN CONCRETO.

La promotora de la oposición a la diligencia de secuestro funda la controversia en la calidad de poseedora del bien inmueble cautelado, asegurando que la posesión la ejerce desde el 23 de noviembre de 2010, fecha desde la cual, según sus dichos, finalizó la unión marital de hecho que tenía con el aquí demandado.

Para respaldar probatoriamente su tesis aporta un documento privado suscrito con su ex compañero permanente, mediante el cual declaran la existencia y terminación de la unión y efectúan declaraciones respecto de obligaciones alimentarios entre ellos y sus hijos, asimismo, acompaña su solicitud de factura de impuesto predial del año 2022, declaraciones extraprocesales, informe de inspección de gas del año 2019, fotografías de un inmueble identificado como el número 124, certificados de cuentas bancarias, constancia de pago de servicios públicos y recibos de caja por mantenimiento, reparación y limpieza.

La tesis que sostendrá el Despacho es que, como bien sostuvo el *a quo*, no se demostró con suficiencia el ánimo de señorío de la opositora como elemento esencial de la posesión.

Como se anotó, la posesión se conforma de los elementos sin los cuales no es posible considerar su existencia, a saber, el *corpus y animus*, el primero entendido como la relación material con la cosa, y el segundo como la voluntad, el ánimo de señor y dueño frente a la misma, debiéndose probar, bajo el principio de necesidad de la prueba la presencia de ambos presupuestos.

En el caso concreto, los medios de prueba podrían evidenciar la detentación material de la cosa, esto es, la relación de tenencia que ejerce la opositora frente al bien objeto de cautela, verbigracia, las declaraciones extraprocesales aportadas donde se manifiesta que reside en el inmueble o el testimonio de la señora Liliana Salazar, quien depuso igual situación y que tiene conocimiento de ello por la relación laboral con la misma como empleada doméstica que genera su permanencia temporal en el inmueble. Igualmente, los recibos de caja por servicios de jardinería, pintura general, arreglo del techo y plomería.

Sin embargo, no basta probar la tenencia física de la cosa, es imperativo acreditar el ánimo de señor y dueño y es precisamente en ese punto donde la Sala advierte la falencia probatoria, pues los medios de convicción no generan la certeza suficiente del *animus*, en cuya virtud una mera tenencia transmuta en posesión.

En efecto, los medios de prueba no muestran actos de señorío sobre el bien. En concreto, el recibo de impuesto predial no refleja constancia de su pago, las declaraciones extraprocesales, como se indicó, solo dan cuenta de la residencia que ejerce la opositora y las fotografías no permiten identificar si el inmueble pertenece al aquí cautelado y, de

admitirse su identificación, a lo sumo, no reflejaría más que un acto de mera tenencia.

En igual sentido, las constancias de servicios públicos no identifican el inmueble y, de ser así, tampoco develan actos de posesión, el testimonio rendido por Liliana Salazar da cuenta de unos actos de mantenimiento y aseo general que asume la opositora que bien pueden ser asumidos por un mero tenedor y los recibos de caja por mantenimiento por sí solos no generan la convicción suficiente de actos de señorío.

Por el contrario, se advierten actos del aquí demandado y otro tercero que reflejan comportamientos con ánimo de dueños de la cosa que generan serias dudas sobre la condición de poseedora de la reclamante e impiden considerar la revocatoria de la decisión de primer grado.

Ciertamente, el certificado de libertad y tradición del bien cautelado muestra que para el 2009, época en que según los dichos de la opositora se mudó con la familia al inmueble, la titularidad de dominio la adquirió la sociedad Activos e Inversiones Líder S.A.S., sin que se hubiese acreditado vínculo alguno con tal persona jurídica que además, con posterioridad, otorgó una hipoteca abierta en favor de Carlos Arturo Betancur Castaño y Daniela Betancur Gil que fue cancelada con posterioridad por voluntad de las partes, a través de una escritura pública que data del año 2015, adquiriendo en el mismo año el aquí demandado el derecho de dominio del bien y otorgando el gravamen hipotecario que es objeto este proceso.

Emerge del anterior recuento serios y contundentes actos de disposición generados no solo por el demandado, sino también por la persona jurídica en comento que ponen en entredicho los actos de señorío que defiende la opositora, quien solo efectuó gestión tendiente a la adquisición del bien con la promoción de la demanda de pertenencia en el año 2023, esto es, 8 años después de que el demandado adquiriera la propiedad y otorgara la garantía real sobre el bien inmueble y muchos años después de que la sociedad (anterior titular) otorgara y cancelara el gravamen hipotecario previo.

Llama además la atención de la Sala la fecha del inicio de la posesión que aduce la promotora que, según sus dichos, ocurrió en noviembre de 2010 derivada de la separación de su excompañero permanente, no obstante, permaneció inerte cuando el mismo adquirió el dominio cinco años después.

Bajo ese panorama, no se advierten actos inequívocos de posesión, ni resulta clara la fecha en que comenzó a ejercer la posesión la opositora y, aun cuando el recurrente asegura que los medios de prueba sí acreditan la calidad de poseedora y alude a las divergencias ocurridas entre las declaraciones de los testigos Julio Enrique Tobón y Deisy Restrepo acerca de una reunión previa al otorgamiento de la hipoteca, ello resulta fútil cuando no existen elementos de juicio que con contundencia demuestren actos de señorío de la opositora y no existe un razonamiento con fuerza suficiente que permita estimarlos.

La opositora manifestó en interrogatorio que hubo un acuerdo verbal con el excompañero permanente de separación de los bienes, donde pactaron que ella se quedaría con el bien objeto de disputa, pero tal afirmación no tiene respaldo en otro medio de prueba y el documento privado suscrito con el demandado nada dice al respecto, además, la afirmación pierde credibilidad al advertir las conductas desplegadas tanto por el propietario actual y la anterior titular de dominio durante el lapso que afirma la opositora ejerció la posesión.

Y aun cuando en interrogatorio esta depuso sobre la indisponibilidad de recursos económicos para adelantar gestiones como la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial, tampoco existe soporte probatorio de tal dicho.

Conviene resaltar que, la situación fáctica de inicio de la posesión por un acuerdo verbal con el demandado bien pudo obedecer un acto de mera tolerancia del propietario inscrito que, conforme ha sostenido la jurisprudencia no comporta eficacia posesoria. En palabras de la Corte:

"Cuando se habla de posesión material, no se trata de actos de mera tolerancia (artículo 2520 del Código Civil), fundados en relaciones de amistad, de condescendencia, de parentesco, de coparticipación o de comunidad (...) de benevolencia, de ocasión, o de licencias que otorga el titular del derecho de dominio; todos los cuales no tienen eficacia posesoria, por su carácter circunstancial, temporal o de mera cortesía, o por su naturaleza anfibológica o ambigua (posesión propia del heredero y posesión del heredero en nombre de la herencia; posesión en nombre del comunero y posesión del comunero en nombre de la comunidad; posesión propia del socio o accionista y posesión del socio en nombre de la sociedad).

En general, todos esos comportamientos obedecen a meras concesiones del dueño, que no están acompañados de la voluntad de despojarse del dominio en pro de quien se beneficia de tales conductas" (Negrilla fuera del texto)¹⁸.

En ese orden de ideas, el Despacho estima que la opositora no cumplió con la carga demostrativa para derivar los correspondientes efectos jurídicos que persigue, en la medida que no logró acreditar la condición de poseedora para el buen suceso de la oposición planteada, pues los medios de convicción, a lo sumo, advierten una circunstancia de mera tenencia, no así del *animus* que requiere la figura de la posesión, en consecuencia, se impone la confirmación de la decisión recurrida, sin condena en costas por no haberse causado.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Unitaria de Decisión Civil,

4. RESUELVE.

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión impugnada, sin condena en costas.

SEGUNDO: REMITIR el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE



SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ
Magistrado

¹⁸ Sentencia SC17221-2014. Radicación n.º 47001-31-03-004-2004-00070-01. MP. LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA